Cuando Hacienda no somos todos

EN DIFERIDO

Javier Montalvo

a tormenta desatada en la Agencia Tributaria, con destituciones y dimisiones en cascada de altos responsables de la dirección de inspección de grandes empresas, llega en el peor momento posible. El Gobierno ha reclamado a los ciudadanos contribuyentes un esfuerzo extra, en forma de subidas de imouestos indirectos y de IRPF, para atajar un dépuestos inimetoros y de irres para acaja un un-ficit público que, aún indirectamente, se consi-dera responsabilidad de todos. Con salarios a la baja y la incertidumbre laboral al alza, en un país con casi seis millones de desempleados, este esfuerzo reclamado desde el Gobierno se convierte, en muchos casos, en heroicidad. Los ciudadanos piden a cambio, al menos, que todos los contribuyentes aporten en proporción a sus ingresos a las necesitadas arcas públicas.

Durante el pasado noviembre fue cesada la jefa adjunta de la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero tras la firma de un acuerdo, mediante el que se resolvía un recurso de reposición contra una san-ción tributaria derivada de un acta de disconformidad, en contra de las instrucciones dadas por la Delegación Central. Aquel expediente era relativo al Impuesto de Sociedades de la filial española del gigante mexicano del cemento Cemex y podría acarrear una sanción de hasta 450 millones. Posteriormente se presentaron otras dimisiones.



Los inspectores explicaron entonces que, según la jefa destituida, el acuerdo, que desesti-maba las pretensiones de la empresa, se fundamentó en que el contribuyente no alegó ninguna cuestión nueva que no hubiera esgrimido ya en la tramitación del expediente recurrido. El Gobierno ve normal el cambio de una decena de responsables en un organismo que, como la

Los ceses en el órgano de control que investiga a las grandes empresas crea incertidumbres sobre la Agencia Tributaria

Agencia Tributaria, emplea a más de 20.000

do verano se han multiplicado las inversiones de empresas mexicanas en España. Hace apenas quince días, el grupo Sigma lanzó una opa sobre Campofrío, valorada en 650 millones de euros. En agosto, dos empresas mexicanas se comprometieron a invertir más de 1.000 millones en sendas operaciones en España. El grupo de transporte ADO cerró la compra de Avanza a Doughty Hanson por cerca de 800 millones de euros. Fibra Uno, un fondo institucional mexicano dedicado al alquiler de inmuebles, también eligió España para entrar en Europa. La firma firmó la compra de 278 oficinas de

Banco Sabadell por 300 millones. El ministro de Industria, José Manuel Soria, viajó de urgencia a mediados de noviembre a México D.F. para mediar en el conflicto desatado entre Argentina y Repsol por la expropia-ción de YPF a la petrolera española, de la que la mexicana española es accionista de referencia.

También a mediados de noviembre, el presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz, reclamó la implementación de una tasa a las transacciones financieras, pero sin la creación de un ministerio fiscal comuni-tario. Según Schulz, "Europa no necesita una armonización fiscal, requiere un pacto de los 28". Dos semanas después, Bruselas anunció un plan para endurecer la directiva que regula la relación entre las matrices de las grandes corporaciones, como Google y Apple, y sus fi-liales en Europa, para tratar de cortocircuitar una de las grandes vías de fuga fiscal para los países de la UE. Estas compañías registran en países con fiscalidad muy baja, como Irlanda, los ingresos obtenidos en sus mayores mercados, como España, Francia, Alemania e Italia, que no ven prácticamente un euro de las actividades de estas empresas. En España, desde donde el Gobierno ha apo-

vado con entusiasmo esta decisión, las grandes empresas siguen logrando fuertes ahorros y pagan de media una tasa efectiva apenas superior al 5% de sus beneficios, en comparación con el 30% que tendrían que abonar, en Impuesto de Sociedades, sin aplicarse deducciones. Se desconoce cuánto se ahorra Cemex.

